

A la luz, los **secretos** de las matanzas de Tamaulipas

Con base en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, la organización National Security Archive logró desclasificar documentos diplomáticos que revelan la colusión de funcionarios federales, estatales y municipales —entre ellos los exgobernadores Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández— con las organizaciones criminales que operan en Tamaulipas. Proceso ofrece una síntesis de la manera en que Los Zetas cometieron sus tropelías contra cientos de indocumentados centroamericanos entre 2010 y 2012.

MARCELA TURATI

Salieron en autobuses de pasajeros rumbo a la frontera soñando en su nueva vida, pero regresaron a bordo de un tráiler con caja refrigerante que los depositó en una morgue. La mayoría de los 196 cadáveres hallados en abril de 2011 en las fosas en San Fernando, Tamaulipas, era de migrantes pobres asesinados a golpes; su vida no valió siquiera una bala. Al gobierno de Tamaulipas le preocupaba que la mala publicidad espantara el turismo y las inversiones. Alguien ordenó sacar del estado los cuerpos para tapar el escándalo.

La información está contenida en la serie de cables desclasificados que funcionarios estadounidenses enviaron de México a Washington entre 2010 y 2012. En esos reportes queda claro que el gobierno mexicano estaba al tanto de los crímenes que cometían Los Zetas en San Fernando desde antes de la masacre de los 72 migrantes de agosto de 2010 y del hallazgo, al año siguiente, de las fosas comunes.

Los informes, obtenidos por la organización National Security Archive (NSA) con base en la Ley de Libertad de Información

de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés), revelan la colusión de funcionarios municipales, estatales y federales mexicanos con los criminales (la sospecha incluye a los exgobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores); la presencia de *kaibiles* en la zona y la petición de ayuda a Washington por parte de la cancillería mexicana para salvar la popularidad de Felipe Calderón, desplomada por aplicar una estrategia de combate contra las drogas (cofinanciada por Estados Unidos) que los mexicanos, y los propios funcionarios estadounidenses, consideraban como generadora de violencia.

Los reportes diplomáticos —confeccionados por distintas dependencias a partir de informantes, funcionarios mexicanos, análisis y notas de prensa— muestran que los cárteles controlaban parte de Tamaulipas, el sufrimiento de la población, el sometimiento de la prensa y la pantomima de un gobierno que simulaba llevar las riendas.

El investigador Michael Evans, del NSA, publicó los primeros documentos en el blog de la organización para mostrar el intento del Estado mexicano por minimizar su responsabilidad ante los crímenes. Nuevos cables proporcionados a Proceso completan la película de horror que vivió

Tamaulipas apenas el sexenio pasado.

El reporte clasificado con los números 20100416 (clave que indica el año, el mes y el día de ese escrito del 16 de abril de 2010) señala que marzo, con sus 900 homicidios a escala nacional, fue uno de los más sangrientos y que los funcionarios mexicanos no anticiparon la escalada de violencia cuando el Cártel de Los Zetas se lanzó a controlar las lucrativas plazas del noreste.

Durante febrero y marzo el consulado de Matamoros, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, informó que la ruptura del Cártel del Golfo (CDG) con sus anteriores aliados provocó que la población fuera castigada sólo por vivir en lugares controlados por rivales. A cada golpe le seguía una venganza. (20100325)

El pánico se apoderó de Ciudad Victoria —capital del estado—, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, y los rumores obligaban a cerrar escuelas. Matamoros —preveía el consulado— podría “ser escena de confrontación en un futuro” por ser cuartel del CDG y valor estratégico para una futura ofensiva”.

Desde el 28 de mayo de 2010 uno de esos documentos menciona un enfrentamiento, como muchos, entre fuerzas federales y sicarios. Su contenido fue casi totalmente censurado, salvo un dato:



AP photo / "El Universal"

nos y un miembro del cártel fallecieron. Un menor fue aprehendido, y después el sobreviviente lo identificó como uno de los secuestradores.

El día 24 a las seis de la tarde la Marina encontró los cuerpos en un rancho abandonado: los 72 parecían haber sido amontonados contra la pared de la bodega. "Reportes no confirmados indican que una o más de las mujeres víctimas estaban embarazadas. Las víctimas fueron encontradas sin ninguna identificación. Los tres camiones y el equipaje de los migrantes no fueron recuperados", se lee en el texto.

En el comentario final, el diplomático que realizó el reporte señala: "Si el relato del sobreviviente es preciso, esto representa un nuevo nivel de violencia de Los Zetas". Esto porque no parece haber una utilidad de estas muertes para ellos, ya que no pidieron rescate por sus secuestrados como acostumbraban.

"Una teoría planteada por –el nombre de la fuente está borrado– es que como las ganancias de la introducción ilegal de migrantes a Estados Unidos son destinadas al Cártel del Golfo, los asesinatos fueron la manera que Los Zetas encontraron para herir financieramente los intereses de CDG."

La siguiente comunicación, del día 27, es un resumen de hechos de los últimos cuatro días.

En septiembre, Matamoros y sus alrededores parecen vivir una guerra. El alcalde de Hidalgo ha sido asesinado; el Ejército y Los Zetas se enfrentan en Ciudad Mier; tres granadas de fragmentación hieren a 29 civiles en Reynosa. Los ataques ocurren a tres cuadras de un servicio funerario para los 72 migrantes y cerca de la morgue donde se depositaron algunos de sus cuerpos.

Más tarde se registra un ataque contra el hospital de la Marina donde se recuperaba el ecuatoriano que era el informante.

El día 2 de ese mes aparece el segundo sobreviviente de la masacre, quien, según informó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a los estadounidenses, se había desplazado solo a Matamoros y "supuestamente fue trasladado al DF para declarar" (20100903).

En tanto, México intentaba limpiar su mala imagen internacional.

Crisis de los autobuses

El 14 de febrero de 2011 fue el día más violento desde la masacre de agosto del año anterior: 26 personas son asesinadas. Una granada en un centro comercial de Matamoros hiere a nueve civiles –según el reporte 20110215– en "un intento de Los Zetas para calentar la plaza al grupo dominante".

Comienzan los hallazgos de autos calcinados en las carreteras, los asesinatos de pasajeros de autobuses alcanzados por ▶

de cuatro personas asesinadas y cuatro arrestadas el día 19 "se pudo determinar que algunos de ellos eran miembros de Los Zetas y los sujetos de Guatemala eran miembros de las fuerzas especiales de Guatemala (kaibiles)", militares conocidos por la extrema crueldad de sus métodos de sometimiento de la población, entre éstos las decapitaciones.

En agosto siguiente, un memorándum secreto de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado mencionaba: "La ofensiva de Calderón ha ejercido presión sobre los cárteles, pero también ha tenido consecuencias no previstas: por ejemplo, la remoción de los líderes de las organizaciones del narcotráfico ha llevado a personas con menos experiencia y disciplina a ocupar esos vacíos, contribuyendo a un pico en los asesinatos relacionados con las drogas" (20100800).

Revelaciones de la masacre

El 22 de agosto de ese mismo año, 75 migrantes de Guatemala, Honduras, Brasil, Ecuador y un "hindú" que viajaban hacia la frontera en un tráiler de tres paneles fueron detenidos por un número inde-

terminado de criminales y transportados bajo vigilancia a San Fernando.

El secuestro se habría realizado al norte de un retén fijo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la carretera, a través de pequeños caminos rurales, según el cable enviado desde el consulado de Matamoros, cuatro días después de la masacre (20100826).

Entre los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres yacían dos migrantes que por el impacto perdieron la conciencia, pero despertaron: eran un salvadoreño y un ecuatoriano de 18 años. Este último relató los hechos anteriores.

Los sobrevivientes huyeron en distintas direcciones. El ecuatoriano escuchó que al salvadoreño lo persiguieron unas camionetas, luego disparos, e imaginó que había sido asesinado. Mientras tanto, buscó auxilio en una casa o intentó acercarse a los policías locales (el cable destaca que la narración difiere en este punto), mas no lo ayudaron.

Caminó durante la noche. En la madrugada del 23 de agosto llegó a un retén de la Marina, donde dio aviso de lo sucedido. Al intentar ubicar por tierra el lugar de la masacre los marinos llegaron a un rancho en el que fueron atacados. Tres mari-



Benjamin Flores

Autoridades. Resultados anecdóticos

“Los hallazgos de San Fernando han atraído a muchos familiares que no habían querido reportar anteriormente las desapariciones a causa del miedo o por amenazas del crimen organizado”, indica el reporte que menciona enseguida esa como la excusa de los funcionarios estatales para su inacción, “la falta de denuncias normales antes del descubrimiento de las fosas impidió a la procuraduría estatal investigar los problemas que eran sospechados en el área de San Fernando”.

Resalta otro dato: “Ninguna de las compañías de autobuses ha presentado una queja formal sobre los ataques de los miembros del crimen organizado sobre los autobuses o sobre pasajeros a pesar del hecho de que los secuestros habían sido generalizados (...) Las autoridades sólo habían recibido dos reportes no oficiales de dos de los secuestros masivos de pasajeros del 24 de marzo. Aunque en privado las autoridades reconocieron que los secuestros son comunes”.

Para entonces la prensa mencionaba que nueve autobuses habían sido secuestrados en ese punto; a las terminales sólo llegaban las maletas.

El 13 de abril, la PGR envió a la capital del país 105 cuerpos y argumentó que allá habría más equipo y que las familias provenientes de Guanajuato y Michoacán tendrían más facilidades. El resto se quedó en Matamoros; los más descompuestos serían enviados a Victoria.

Off the record, oficiales mexicanos dijeron a funcionarios del consulado que “los cuerpos están siendo separados (en grupos) para que la cifra total sea menos obvia y, así, menos alarmante”.

El diplomático que escribe el reporte señala: “El traslado de 105 cadáveres de la sobresaturada, insuficiente morgue de Matamoros al DF, es entendible desde un punto de vista práctico, pero también ayuda a restar visibilidad a la tragedia”.

Revela también que las autoridades estatales sabían lo que ocurría: “Apartadamente las autoridades de Tamaulipas están tratando de minimizar los descubrimientos de San Fernando y la responsabilidad estatal, a pesar de que en un reciente viaje a Ciudad Victoria se reveló que los funcionarios estaban plenamente conscientes del peligro de viajar por carretera a través de esta zona”.

Para finales de mes los cuerpos eran 196 y “se prevé un aumento debido a que la Sedena y la Semar continúan la búsqueda”; 74 personas fueron arrestadas en conexión con los crímenes. Después sería detenido Martín El Kilo Estrada, el jefe local de Los Zetas.

Los funcionarios estatales, en tanto, maniobran para ocultar los hechos. “A pesar de las afirmaciones del gobierno del incremento de la seguridad, durante el periodo de las

fuegos cruzados y las detenciones masivas como la ocurrida entre Victoria y Matamoros, donde 23 pasajeros fueron obligados a bajar y se les despojó de sus pertenencias.

Dos meses después, en abril, comienzan a descubrirse las llamadas narcofosas. Primero eran 48 cuerpos, dos de ellos vestidos con uniformes de policía, en la comunidad de La Joya, cerca de San Fernando. Algunos en avanzado estado de descomposición, otros fallecidos en un lapso de menos de 10 días.

La primera información que recibe el

consulado de funcionarios mexicanos es que los cuerpos probablemente son de narcotraficantes, secuestrados o víctimas de la violencia carretera. El reporte termina con un comentario: “De acuerdo con fuentes oficiales al menos 224 personas han sido secuestradas de las carreteras de Tamaulipas en semanas recientes, incluido un grupo obligado a bajar de un camión interurbano el 23 de marzo” (20110406).

Esa misma semana ya eran 81 los cadáveres encontrados en 17 sitios. El documento 20110408 revela una historia hasta entonces oculta:

El 19 de marzo miembros del crimen organizado secuestraron a 24 personas de un autobús público originario de San Luis Potosí que viajaba a Reynosa. El 24 de marzo secuestraron a 12 personas de un camión originario de Michoacán. También el 24, plagiaron a los 48 pasajeros de un camión de Guanajuato que iba a Reynosa. Los tres cerca de San Fernando.

A partir del 1 de abril, con información de los detenidos y de sus exrehenes, el Ejército localizó fosas comunes en La Joya, al norte de San Fernando. Primero eran 11 cadáveres, luego 145.

Desde el inicio se adjudica la responsabilidad a Los Zetas. “Esto es consistente con la cobertura de la prensa local, pues los pueblos controlados por Los Zetas no han tenido cobertura de los hallazgos”, indica el reporte.

En relación con esos homicidios, 17 de los 25 miembros de la policía de San Fernando eran detenidos acusados de “proteger” a los perpetradores.

La búsqueda de fosas es interrumpida el 13 de abril –lo hace notar el diplomático–, y los funcionarios expresaron su intención de continuarla después.

Desde el 6 de abril, cuando se anunció el hallazgo, el Semefo de Matamoros fue abarrotado por personas que buscaban información sobre familiares desaparecidos.



Hans-Maximo Musielik

San Fernando. Culmen de la crueldad

Maquillaje a la mexicana

Tras conocerse la noticia del asesinato de 72 migrantes, en San Fernando, Tamaulipas, el gobierno mexicano alistó medidas para cuidar su imagen a escala internacional, como lo demuestra una serie de cables desclasificados por la organización National Security Archive, cuyas copias tiene **Proceso**.

Un cable del gobierno estadounidense fechado el 7 de septiembre de 2010 menciona con tintes irónicos que “en respuesta a la presión que tiene encima el gobierno mexicano”, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, presentó en medio de “fanfarrias” un plan de cinco puntos con el que el gobierno se compromete, entre otras cosas, a dismantelar bandas de polleros y combatir los secuestros y asesinatos de migrantes.

El esfuerzo incluye ampliar la capacidad del Instituto Nacional de Migración (INM) mediante “entrenamiento, incremento de personal y cooperación con sus contrapartes de Estados Unidos”.

Para enero de 2011, otro cable de Washington comenta que no fue sino hasta cuando los gobiernos centroamericanos protestaron y que las noticias de las atrocidades contra migrantes ganaron titulares en la prensa, que el gobierno mexicano comenzó a poner atención al tema.

Considera que los crímenes de alto perfil cometidos en 2010 contra migrantes —incluido el secuestro de 40 de ellos en un tren en Oaxaca— revelaron el “invasivo control de la organizaciones criminales transnacionales (TCO) de la migración ilegal, donde éstas actúan alternativamente como gestores pa-

gados (polleros), extorsionadores, secuestradores y traficantes”.

Esa comunicación es quizá la más dura contenida en los documentos desclasificados sobre los hechos ocurridos en Tamaulipas entre 2010 y 2012, pues responsabiliza al “inefectivo” INM de permitir que los migrantes eludan los retenes por “una combinación de falta de personal, incapacidad y corrupción”.


Añade: “Evidencias circunstanciales indican que las autoridades de migración y las policías locales con frecuencia se hacen de la vista gorda o están coludidas en estas actividades” (20110131).

Entre las soluciones propuestas por el gobierno de Estados Unidos para resolver la crisis se menciona la creación del Plan Estratégico Bilateral (PEB) entre el Departamento de Seguridad Interior (DHS) y la Secretaría de Gobernación (Segob) que, en conjunto con las aduanas, buscará combatir la llegada de migrantes no mexicanos a la frontera.

Ese plan “incluye la formación de un grupo de trabajo especial para combatir colectivamente el tránsito de nacionales de terceros países a través de México... mediante mayor intercambio de información y datos biométricos; estrategias diplomáticas conjuntas enfocadas a promover el requisito de visa para los países en la ruta de viaje hacia México; mayor detención y deportación de nacionales de terceros países desde México, con apoyo financiero del DHS, de ser necesario; entrenamiento más amplio para el INM...”.

Respecto al plan presentado por Blake Mora, menciona: “Ha habido poco progreso en su implementación desde su anuncio el año pasado”.

“Funcionarios también repetidamente han afirmado que pueden garantizar la seguridad de cualquier negocio de los inversionistas sin explicar cómo planean hacerlo” (20110429).

Para mayo, la Sedena había desarmado a 700 policías. En junio se informó del despido de siete altos oficiales del Instituto Nacional de Migración “en medio de alegatos de que estuvieron involucrados en el secuestro de migrantes”, ya que “inmigrantes de Centroamérica (específicamente de El Salvador y Guatemala) los acusaron de sacarlos de los autobuses y entregarlos a las bandas de narcotraficantes en el estado de Tamaulipas” (20110613). Esos meses tanto la Policía Federal como la Sedena se dedican a liberar secuestrados de casas de seguridad. 

En 2011 la relación entre México y Estados Unidos se tensó al difundirse los cables filtrados por *Wikileaks* que contenían la opinión de los estadounidenses en torno a la política interna mexicana. En la relatoría de la conversación entre la canciller Patricia Espinosa y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ésta le pide trascender el escándalo y reafirmar su cooperación y amistad.

Por su parte, Espinosa informa que Calderón cuenta con 54% de aprobación; sin embargo, casi 70% de la población lo culpa por el empeoramiento de la seguridad. Por ello, pide a la jefa de la diplomacia estadounidense que coordinen un mensaje público para exhibir los logros calderonistas, como el hecho de que 20 de los 36 capos de la droga fueron arrestados o están muertos.

A su vez, Clinton dijo que tanto el presidente Barack Obama como ella dejaron claro que Estados Unidos comparte una responsabilidad por el papel y el impacto de los DTO (organizaciones de tráfico de drogas) en México. Asimismo, manifestó su admiración hacia el michoacano por su compromiso y valentía. La canciller mexicana menciona San Fernando y la necesidad de que ambos gobiernos combatan la violencia contra los centroamericanos. (MT) ●

Victor Hugo Valdivia Estrada



Sabían del peligro

vacaciones de Semana Santa (abril 16-24) ocurrieron varios eventos violentos, incluyendo ataques a tres camiones que transitaban por la carretera Victoria-Monterrey a la altura de Ciudad Hidalgo, en los que hubo un herido de balaceras en cada uno”.

En abril otro cable indica que los gobiernos federal y el estatal se adjudican unos a otros la responsabilidad. En privado, según indica, los funcionarios han dicho que la seguridad en general, y la violencia en las carreteras en particular, es su preocupación más grande, pero evitan en público el tema de la violencia. Una muestra del sinsentido es el anuncio del gobernador Egidio Torre Cantú de que el estado es un buen lugar para invertir y su exageración sobre las seguras condiciones de las playas “fuertemente patrulladas”.